

PLAN DE REFORMA

O REVISIÓN DE LA

CONSTITUCION

DE LA PROVINCIA DE CUNDINAMARCA

DEL AÑO DE 1812

Sancionado por el Serenísimos Colegio Revisor y
Electoral de la misma, en sesiones tenidas
desde el mes de junio hasta el 13
de julio de 1815



SANTAFE

EN LA IMPRENTA DEL ESTADO

Por el C. José María Ríos, impresor del Congreso
de las Provincias Unidas de la Nueva Granada

AÑO TERCERO DE LA INDEPENDENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA CENTRAL

BOGOTÁ, D. E.

PLAN DE REFORMA

El Colegio Electoral de esta provincia, teniendo presentes el Plan de Reforma que hizo el Serenísimo Cuerpo Deliberante en 23 de septiembre y el de 21 de octubre de 1814 mandado publicar por el Gobierno General en aquellas fechas, sobre centralización de los ramos de Hacienda y Guerra, a que esta provincia se prestó con la mayor voluntad por medio de sus representantes luego que se vio libre de la opresión en que se hallaba, ha acordado en la presente revisión de su última Constitución de 17 de abril de 1812 establecer los artículos siguientes, que poniendo en mejor pie su particular gobierno, uniforman el nuevo sistema de centralización. En esta atención ningún artículo de la Constitución citada servirá de argumento contra los presentes que deben ser observados inviolablemente como última sanción de este cuerpo representativo.

Del cuerpo legislativo y sensorio.

1º En el concepto de suponerse a esta provincia doscientos cincuenta mil habitantes, se compondrá este cuerpo de cinco individuos a razón de un Legislador Senador por cada cincuenta mil.

2º Estos deberán ser vecinos de Cundinamarca, mayores de veinticinco años, de probidad, de luces y de notorio patriotismo.

3º Sus atribuciones serán velar sobre la inversión de los fondos públicos; representar al Gobierno de la Unión los abusos que note en la administración de las rentas, y

las reformas o mejoras que estime convenientes; promover el establecimiento de cabildos en los pueblos donde convenga, y las pequeñas municipalidades en todos los demás inferiores a la mayor brevedad, como se ha dispuesto en las Constituciones de esta república.

4º Toca a la Legislatura exclusivamente aclarar las leyes, derogarlas y abolirlas.

5º Toda ley o resolución dada por el Poder Legislativo se pasará al Gobierno para su publicación y cumplimiento; pero si éste hallase algún inconveniente, lo representará dentro de ocho días, y el Cuerpo Legislativo tomará de nuevo en consideración la materia, y su resolución se ejecutará sin excusa.

6º Pero si la ley en su ejecución presenta graves inconvenientes o perjuicios públicos, notados éstos por el Poder Ejecutivo con la debida comprobación, lo manifestará a la Legislatura para que la vuelva a tomar en consideración no obstante lo contenido en el artículo antecedente.

7º La Legislatura hará las funciones del Senado, y su primer objeto bajo este concepto será velar sobre el cumplimiento exacto de la Constitución, e impedir que se atropellen los derechos imprescriptibles del pueblo y del ciudadano.

8º Este cuerpo elegirá su presidente y vicepresidente, y los tres restantes tomarán el asiento que les toque por suerte, debiendo presidir en falta de los primeros el que se haya seguido en el lugar. Las sesiones serán continuas en todo el año, porque a más de los trabajos relativos a la Legislatura tienen los del Senado; por cuya consideración cada Legislador Senador disfrutará de seiscientos pesos anuales, y el secretario, que será del mismo cuerpo, setecientos pesos por el mayor trabajo que se le añade.

9º Será renovado este cuerpo por cada colegio, pero sus individuos podrán ser reelegidos.

10. Para que sean válidas sus sesiones deberán concurrir todos sus ministros, y la pluralidad absoluta causará la resolución.

11. Para los casos de ausencias, enfermedades o muerte de alguno de sus individuos, entrará en su lugar el que haya tenido la mayoría en las elecciones de aquella Legislatura, para cuyo efecto los secretarios de los Colegios Electorales pasarán a ésta copia certificada del acta de elecciones. Pero en estos casos el subrogado tirará todo el sueldo del ausente o enfermo.

12. Cuando no haya mayorías, o los que las tengan estén impedidos, se llenarán las vacantes por los poderes Ejecutivo y Judicial, haciendo la elección como los Colegios Electorales la practican.

13. El orden con que el Poder Legislativo debe proceder en las discusiones lo establecerá el mismo cuerpo según las materias y su gravedad.

14. Creará una Junta provincial y contaduría de propios, arbitrios y bienes de comunidad, arreglándola en lo adaptable al orden prescrito en la Ordenanza de Intendentes de México, desde el artículo 28, número 35, hasta el 54 y 63.

15. Con estos productos y los más que meditará, creará las escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la provincia, sin la menor dilación, dándole las reglas necesarias al Gobernador, y la de que precisamente por género de descanso y diversión, concluida la tarea de la escuela, los maestros diariamente enseñen a los jóvenes sus discípulos, media hora por la mañana y media por la tarde, el ejercicio militar; con la que se dé cuenta anual al Gobierno, quien la pasará a la Legislatura, tanto del número de jóvenes que enseñen como de sus progresos, para su conocimiento y ulteriores medidas que deban tomarse.

16. Pero si depurados todos los medios no se cubren las cantidades precisas para el salario de estos maestros, tratará la Legislatura por medio de su Gobierno con el Eclesiástico y su V. D. y C. a fin de que se haga un moderado gravamen a los beneficios, bien en los novenos, o en otros productos, como que deben concurrir los Curas a la enseñanza pública, mucho más de la Doctrina Cristiana, como objeto de su primera y más sagrada obligación, de que se alivian y aun descargan con estos maestros.

17. Dará igualmente reglas a los nueve jueces políticos que debe haber en los cantones de esta provincia, como órganos precisos del Gobierno, para el mejor orden y fomento de sus habitantes en todos ramos.

18. Estos cantones serán el de Boşá, con los pueblos de Soacha, Parroquia de Tena, Usaqué, Suba, Fusagasugá, Tibacuy, Pasca, Pandi y Cunday.

19. El de Ubaque, con Cáqueza, Chipaque, Choachí, Une, Fosca, Fómeque y Usme.

20. El de Guaduas, con Villeta, Sasaima, La Vega, Nocaíma, Quebradanegra, Chaguaní, Vergara y Nimaíma.

21. El de Chiquinquirá, con Susa, Simijaca, Saboyá, Muzo, Paimé, Maripí, Coper, Pauna y Yotocó.

22. El de Sanmartín, con Cumaral, San Juan, Medina y los pueblos de estas Misiones.

23. El de Zipaquirá, con Chía, Cajicá, Tabio, Nemocón, Sopó, Gachancipá, Tocancipá, Cucunubá, Tausa, Ubaté, Fúquene, Sutatausa, Pacho, Cogua, Cota y la Parroquia de la Mesa de Ubaté.

24. El de Bogotá, con Fontibón, Facatativá, Tenjo, Serrezuela, Bojacá, Zipacón, Engativá y Subachoque.

25. El de Tocaima, con La Mesa, Colegio, Vituima, Santa Rosa, Nilo, Piedras, Anapoima, Anolaima, y los que con la división de Mariquita puedan aumentarse.

26. El de Chocontá, con Sesquilé, Guatavita, Guasca, Gachetá, Chipasaque, Machetá, Tibirita, Manta y Suesca.

27. Los sueldos de estos jueces políticos los asignará la Legislatura a proporción de los productos que manejan, del trabajo, y de lo que el Gobierno general señale por lo primero.

28. La elección de los jueces políticos la harán los pueblos de estos cantones por medio de apoderados nombrados a este efecto; pero deberán poner los ojos en personas de notoria probidad, de luces y de calificado patriotismo.

29. Hecha esta elección, los nombrados ocurrirán al Gobierno a obtener el respectivo título, precediendo su aprobación.

30. Estos, a más de las obligaciones generales, tendrán la particularísima de trabajar por la felicidad de los pueblos que les están encomendados, propendiendo a su ilustración y a que conozcan el interés que todos deben tomar en el sostenimiento de la independencia, y a este fin presentarán a la conclusión del año un estado al Gobierno, quien lo pasará para su conocimiento a la Legislatura, de cuanto hayan trabajado en tan interesantes objetos.

31. La elección de los referidos jueces políticos se verificará dentro de un mes contado desde el día en que fuere publicado este reglamento. Su duración será el intermedio que haya de un Colegio a otro; pero podrán ser reelegidos. Su residencia deberán hacerla en el centro de su respectivo cantón.

32. En las contribuciones que el cuerpo deliberante de la nación imponga a esta provincia, solicitará la Legislatura que en el papel ministerial se estampe una nota de los contribuyentes y la cuota, así para satisfacción de éstos, como para que la Legislatura, a quien antes tocaban estos repartimientos, pueda, instruída de sus pormenores,



representar lo conveniente en favor de la provincia, siendo necesario.

Del Poder Ejecutivo y sus atribuciones.

33. El Poder Ejecutivo lo ejercerá el Gobernador en toda la provincia. Este lo nombrará el Colegio Electoral, y aunque su duración será el intermedio que haya de un Colegio a otro, podrá ser reelegido por una vez, y gozará del sueldo de mil quinientos pesos anuales.

34. Su primera atención la pondrá en fijar una sola opinión extinguiendo partidos y velando sobre el castigo de cuantos promuevan divisiones, como enemigos de la independendencia.

35. Cumplirá exactamente las órdenes del Gobierno general en lo relativo a los ramos de Hacienda y Guerra. Mas si su ejecución en algún caso ofreciere graves inconvenientes, lo representará al mismo Gobierno general, cuya resolución observará si se le previene de nuevo.

36. Corresponde al Gobernador el ejercicio de todas las funciones respectivas a lo político, económico y gubernativo de la provincia en todo lo que no sea legislativo y contencioso, sujetándose al tenor de las leyes.

37. En consecuencia, tomará las providencias más activas para la total extinción de los vagos, procurando que todo hombre viva ocupado y se alimente de su trabajo.

38. Tiene bajo su inmediata protección todos los establecimientos públicos: por esta obligación visitará la provincia a lo menos una vez al año para procurar su felicidad por todos los medios que estén a su alcance.

39. Es privativa del Gobierno provincial la provisión de empleos en los ramos puramente civiles, políticos y judiciales que no correspondan al Colegio Electoral ni a los apoderados de los pueblos, y los títulos de todo empleado

se librarán por el mismo Gobernador sin exacción de derechos.

40. Anunciará a todos los pueblos del Estado las vacantes de los empleos cuya provisión pertenezca al Gobierno de la provincia, verificándolo por medio de la imprenta, y no los proveerá hasta que haya corrido el término de un mes después del anuncio, a fin de que los ciudadanos puedan hacer sus pretensiones, cuya omisión causará nulidad en la provisión.

41. En las vacantes de empleos correspondientes a la administración general cuidará de recomendar a los ciudadanos beneméritos de esta república, para los que en justa proporción de la totalidad de las Provincias Unidas se deban proveer en ellos.

42. El Gobernador no podrá entrometerse en el ejercicio y funciones del Poder Judicial.

43. Tendrá un secretario y el competente número de oficiales para el despacho de los negocios, nombrados a su satisfacción, supuesto que las faltas que cometan serán de su responsabilidad.

44. El Gobernador saliente dará al entrante exacta relación del estado de la provincia, de sus progresos o atrasos que haya tenido durante el tiempo de su gobierno, de los proyectos de reformas, obras públicas, y de los demás objetos que deban principiar, o se hallen comenzados, o estén para concluirse, y sobre las misiones de indios de San Martín y San Juan de los Llanos, a fin de que no falten misioneros, ni la congrua o estipendio que debe pagárseles del ramo de vacantes, sin que esta obra pía en el grado más eminente sirva en ningún tiempo de apoyo para imponerles carga o pensión a los indios, como tiránicamente se la habían impuesto los españoles.

45. El Gobernador conservará las distinciones y hono-

res que hasta ahora se ha acostumbrado dar a los presidentes, y usará de banda y bastón.

46. Para la ejecución y puntual observancia de las providencias del Gobierno, puede publicar bandos y decretos.

47. El Gobernador y su Teniente no tendrán entre sí parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado, inclusive.

De las atribuciones del Teniente Gobernador.

48. El Teniente Gobernador deberá ser letrado, y su nombramiento lo hará el Colegio Electoral: será un Juez mayor en primera instancia en todos los negocios contenciosos de Gobierno, Hacienda y Policía.

49. Estará bajo su inmediata inspección lo económico de Policía.

50. Suplirá las faltas del Gobernador despachando en el Poder Ejecutivo, en caso de enfermedad, ausencia, muerte o cualquiera otro impedimento legal, en cuyo caso hará sus veces el que haya tenido la mayoría de votos en la elección; pero si éste estuviere impedido, y no hubiere habido sufragios por otro que por el electo, la Legislatura nombrará inmediatamente quien le subrogue hasta que reunida la representación provincial dentro de segundo día nombre nuevo Gobernador, si la falta fuere perpetua, o hasta que cese el motivo de su suplencia.

51. El Gobernador así nombrado por la representación provincial durará hasta que, reunido el Colegio Electoral, elija en propiedad.

52. La duración del Teniente Gobernador será el intermedio que haya de un Colegio a otro; pero podrá ser reelegido por una vez. Gozará del sueldo de mil doscientos pesos; sólo tendrá tratamiento de *Señoría* en lo de oficio; usará bastón y su asiento será después del Gobernador.

53. No exigirá derechos algunos a los que litiguen ante él bajo ningún pretexto.

54. Actuará con el escribano de Gobierno, y éste, en la exacción de derechos, se arreglará al arancel que inmediatamente dará la Legislatura.

55. Será presidente de la Junta de hospicios y cuidará de las rentas de estas casas piadosas y de su inversión con la escrupulosidad que demanda la naturaleza de un establecimiento tan útil a la sociedad.

56. Lo será también del cuerpo cívico y de la Junta provincial de propios, arbitrios y bienes de comunidad; pero sin voto deliberativo.

57. En las causas cuya materia sea del resorte del Gobierno General, irán las apelaciones del Juzgado de tenencia al Tribunal que designe para ellas el cuerpo deliberante, y en las que son peculiares a esta provincia, al de apelaciones de ella.

58. Por ahora, y mientras el Gobierno general dispone otra cosa, el Teniente Gobernador hará las funciones de auditor de guerra.

59. Toca y pertenece al teniente gobernador, como una de sus principales atenciones, la conservación y propagación del precioso fluido de la vacuna.

Justicia civil y criminal. — Primeras instancias.

60. Dos alcaldes ordinarios elegidos anualmente por el cuerpo de apoderados administrarán la justicia civil y criminal, aconsejándose con letrados de su confianza, que pueden ser recusados hasta el número de tres, para cada causa, bajo de juramento como hasta aquí.

61. Los alcaldes ordinarios letrados pueden asesorarse, y en este caso sólo los asesores son responsables de sus providencias; y en el de decidir por sí solos llevarán los jus-

tos derechos de asesoría. Y habiendo comenzado a entender en el negocio, ni el Alcalde podrá consultar a asesor, ni el que lo haya sido podrá dejar de proseguir en él, sino por recusación o legítimo impedimento, so pena de devolver cada uno respectivamente los emolumentos que haya percibido.

62. Si el Alcalde letrado, procediendo por sí solo, fuere recusado, se asociará con su compañero, el que siendo lego tomará consejo de profesor; y si el Alcalde acompañante fuere recusado, el otro tomará sucesivamente por socio otro letrado, con arreglo a lo prevenido en el artículo 60.

63. La recusación de jueces y asesores, se hará sin expresión de causas ni firma de abogado, y si se expresaren, se devolverá el escrito como inepto.

64. Los alcaldes ordinarios y sus asesores deben fundar sus providencias definitivas e interlocutorias, que contengan gravamen irreparable, citando individualmente las leyes en que apoyen su decisión.

65. No se admitirán por escrito demandas que bajen de cincuenta pesos, y éstas y su resolución se sentarán en un libro fraqueándose copia a cualquiera de los interesados siempre que la pidan, y sin otro costo que el del amanuense y papel.

66. Para el pronto despacho de las causas criminales que se sigan en los dos juzgados ordinarios de esta capital, a propuesta de los superiores tribunales de la provincia, el Gobernador nombrará un promotor fiscal del crimen, quien empleándose exclusivamente en la intervención de estos negocios, llevará la voz pública en los juzgados inferiores, y la Legislatura le asignará sueldo correspondiente.

67. Las partes son libres para decidir sus diferencias civiles por árbitros y arbitradores, con arreglo a las leyes,

y en caso de sentirse agraviadas, apelarán a la Sala de apelaciones.

68. Los alcaldes comisarios, además de las obligaciones contenidas en su peculiar instrucción, pueden oír demandas verbales, que no excedan de diez pesos, contra personas de su barrio, avisando luego al Alcalde ordinario y quedando razón circunstanciada en un libro que existirá en la escribanía de éste suscrita por los dos jueces que han intervenido y por el escribano; advirtiéndose que de las penas correccionales impuestas por el comisario se dará cuenta en la próxima visita de cárcel para su confirmación o reforma.

69. Si ocurriere algún caso mayor de heridas, robo, etc., en que sea necesario proceso escrito, el Alcalde del barrio avisará prontamente al ordinario para que proceda; y si éste le diere comisión para el efecto será *in scriptis*; y justificado el cuerpo del delito, recibida la sumaria información, y preso el que resulte delincuente, con nota de esta circunstancia, suscrita del alcaide, entregará el expediente al Juez ordinario. Al efecto se repartirán por el cuerpo cívico todos los barrios de la ciudad entre los dos alcaldes ordinarios.

70. En los lugares donde no hay jueces ordinarios, se elegirán anualmente por el Cuerpo de apoderados el pedáneo o pedáneos que fueren necesarios bajo las reglas observadas hasta ahora.

71. Estos oirán demandas civiles por escrito en materia que no exceda de cien pesos, y en este caso todas sus providencias son apelables para ante el Tribunal de apelaciones. En lo criminal, recibiendo sumaria información del delito, con ella remitirán el reo o reos a la justicia ordinaria del territorio.

72. La justicia debe ser gratuita; pero mientras esto no

se pueda, deben simplificarse por lo menos los gastos de las partes. Por tanto:

73. Los escribanos anotarán en reales de plata los derechos que han de percibir, o que les correspondan, y no por maravedises ni florines, desterrándose los nombres de monedas desconocidas e imaginarias.

74. Se suprime la duplicación y triplicación de derechos en un mismo pleito sólo por litigar dos o tres personas, o un cuerpo o comunidad comprendidos en una sola acción; y esta supresión se extiende a relator, secretario, asesores, letrados, escribanos y dependientes de los juzgados.

75. Los jueces ordinarios, ni los otros deberán exigir alguna contribución por sus firmas.

76. Para abreviar la sustanciación de los pleitos, el término probatorio de ochenta días queda reducido a sólo treinta, de los cuales el actor que debe venir aparejado con sus documentos al juicio, tendrá diez días los autos para instruir su prueba, y los veinte restantes el demandado al mismo efecto.

77. Fuera de la capital o cuando las pruebas se han de traer a ella, o haya diez leguas de distancia del lugar del juicio, tendrán las partes cuarenta días.

78. De diez hasta veinte leguas de distancia del lugar del juicio, serán sesenta, y en pasando de esta distancia, serán los ochenta de la ley, improrrogables, a menos que sea caso de término ultramarino o comparable a él.

79. Las cárceles se han establecido para custodia, no para tormento de los delincuentes, y así debe procurarse su aseo, desahogo y aun comodidad, cuidando de que la reclusión de los presos, sin dejar de ser parte del castigo y con purgación de sus delitos, no sea su mayor suplicio, y que el reo halle en la severidad de la ley que le corrige, la humanidad bienhechora que le mantiene, que le

ejercita, que le enseña, velando al mismo tiempo por su salud y sus costumbres.

80. No se admitirán gestiones de los agentes sin presentar poder bastante, y sin que los escritos lleven la firma de abogado, salvo los que se dirijan a pedir término, recusar jueces, o asesores.

Tribunal de apelaciones.

81. El Tribunal de apelaciones conoce en este grado de todos los negocios contenciosos.

82. Se compondrá de tres ministros y un fiscal, que también lo será del Tribunal de súplicas. Tendrá un relator, un escribano y un portero.

83. Los jueces de esta Sala durarán el intermedio que haya de un Colegio a otro, y turnará por suerte la presidencia cada cuatro años.

84. Cada parte puede recusar un Ministro con el juramento de la ley, y de ningún modo con expresión de causas.

85. Fuera de este caso no serán admisibles más recusaciones del resto de los ministros, sino con asignación de causa calificada y probada conforme a las leyes.

86. Pero si el Juez hubiere de separarse por legal e inculpable impedimento, las partes a prorrata contribuirán el honorario.

87. Si fueren dos los recusados, se nombrarán un letrado a quien por la parte recusante se le satisfará el honorario correspondiente, según lo regule el Ministro que quede expedito, atendiendo a la arduidad del negocio y volumen de los autos.

88. Pero si el Juez hubiere de separarse por legal e inculpable impedimento, las partes a prorrata contribuirán al honorario.

89. Si algún Ministro se separase del conocimiento de la causa por impedimento o falta culpable, deberá satisfacer el subrogado.

90. Por recusación, discordia o impedimento de algún Ministro para sentenciar en una causa entrará a subrogarle el Alguacil Mayor, como suplente nato, sin llevar derechos, y ninguna causa podrá sentenciarse sin estar completa la Sala.

91. Si la falta del Ministro consistiere en ausencia o enfermedad, podrá con anuencia y aprobación de la Sala, sustituir a sus expensas a letrado de su confianza.

92. Para la debida instrucción de los expedientes, oye la Sala la voz del Fiscal, cuando deba interesarla, y puede pedir informe a las oficinas y corporaciones.

93. A este Tribunal se le dará el tratamiento de *Excellencia*, y a sus individuos en particular el que tiene todo ciudadano; pero obrando en comisión tendrán el de *Señoría*.

94. Las sentencias que dictare la Sala de apelaciones, que sean definitivas, o interlocutorias con gravamen irremediable, deben fundarse en las leyes y autoridades.

95. Estas leyes serán las que han gobernado hasta aquí, que no estén derogadas por la Legislatura, ni sean contrarias a este reglamento.

96. A ella deben llevarse las quejas que ocurran por los excesos de los jueces inferiores cometidos en razón de su ministerio.

97. La asistencia de los ministros será diaria como hasta ahora, entrando a las ocho y saliendo a las once, a menos que el concurso de negocios exijan otra cosa.

98. Los parientes dentro de cuarto grado civil de consanguinidad y tercero de afinidad no pueden ser individuos de la Sala de apelaciones.

99. El Fiscal, como que es parte, no es recusable; pero se le podrá acusar rebeldía siempre que retenga los autos por más término que el legal, sin que por esto sea lícito hablar sin compostura y moderación.

100. El Fiscal, al fin de cada tercio del año, deberá haber despachado todas las causas en que intervenga, y sin acreditar con certificación del presidente de la Sala dada con acuerdo del Tribunal, haber cumplido con este requisito, no se le satisfará el sueldo devengado.

101. Por impedimento legítimo y transitorio del fiscal, llevará su voz el Ministro menos antiguo, y el Alguacil Mayor, como suplente nato, ocupará el lugar del Ministro.

102. Si la falta del Fiscal consistiere en ausencia o enfermedad, podrá con anuencia y aprobación de la Sala, encargar el despacho a letrado de su confianza.

103. Las causas que por casos de Corte se hayan radicado en la extinguida Audiencia, y aún estén pendientes en los superiores tribunales de esta provincia, pasarán al Juzgado de primera instancia, si en ello convinieren las partes.

104. Los relatores precisamente ajustarán los memoriales con los abogados de las partes, y éstos los firmarán, no bastando que lo hagan los agentes.

105. Los mismos presentarán todos los sábados a su respectivo Tribunal lista de los expedientes que tengan para relación, a fin de que las Salas determinen los que hayan de despachar con preferencia.

106. Ninguna causa criminal, especialmente de pobres, se votará sin haber concurrido a informar el abogado encargado de la defensa.

107. El escribano de esta sala, y el de la de súplicas no podrán exigir los derechos llamados de vista y tiras, los que quedan suprimidos sin lugar a reclamaciones.

108. Para obtener el oficio de escribano público, a más de la calificación de idoneidad que graduarán las dos salas de justicia, se necesita la aprobación de la Legislatura, cuyo secretario, sin exacción de derechos, franqueará el título.

Tribunal de súplicas.

109. Este Tribunal se compone del mismo número de jueces que el de apelaciones, con el Fiscal, que lo es también de aquella Sala.

110. La presidencia se turnará del mismo modo que en la de apelaciones, y tendrá tantos subalternos como aquélla.

111. La parte que quiera que su causa se vea con mayor número de jueces, lo solicitará cuando mejore la súplica consignando los salarios que se regulen a dos conjuces que nombrará el Tribunal, y serán los únicos que deberán aumentarse.

112. Corresponde a esta Sala el conocimiento de los recursos de súplica, de hecho, queja y agravio que a ella se lleven de la de apelación, arreglándose a los trámites y formalidades establecidos por las leyes sobre este particular.

113. En las recusaciones de los ministros del Tribunal de súplicas se observarán las mismas reglas que están establecidas para la de apelación.

114. De las sentencias pronunciadas en dicho grado no hay otro recurso que el extraordinario de injusticia notoria, siempre que se interponga dentro de sesenta días ante el mismo Tribunal que profirió la sentencia, sin perjuicio de su ejecución.

115. La parte que lo interponga consignará, o afianzará al mismo tiempo que lo intente la cantidad de quinientos pesos; en cuya pérdida incurrirá si la sentencia

fuere confirmada en todo, o en más de la mitad del interés que se disputa.

116. Verificada la consignación o caución, con documento que la acredite, ocurrirá el actor al Senado, quien pedirá los autos, y para la decisión nombrará siete abogados de conocida probidad y luces que formen el tribunal: dos de los cuales podrán ser recusados sin asignación de causa; pero el resto en los términos prevenidos para las salas de apelaciones y súplicas, y sus salarios los satisfará el recurrente, regulados que sean por el Tribunal de súplicas.

117. Si la sentencia fuere confirmada en todo o en la mayor parte, la mitad de la suma depositada se aplicará al que la obtuvo en la tercera instancia: el tercio de la otra para gastos de justicia, y lo demás para establecimiento de escuelas y otros de pública utilidad.

Juicio de residencia para los funcionarios en la Provincia.

118. Los individuos que el Colegio Electoral venidero nombre para las dos salas de justicia, formando un cuerpo, residenciarán a todos los miembros de la Representación Provincial, concluidas que sean las funciones de sus respectivos oficios.

119. A este efecto la Legislatura fijará los casos de residencia y las penas, que deben circular por toda la provincia, así para el conocimiento del próximo Tribunal, como para inteligencia de los demás ciudadanos.

Elecciones de Representantes al Congreso de la Nueva Granada.

120. Al Colegio Electoral corresponde la elección de representantes y suplentes de la provincia al Congreso General de la Nueva Granada.

121. Los representantes y suplentes durarán en este ministerio dos años, renovándose uno cada año.

122. Estos recibirán los poderes e instrucciones del Colegio Electoral.

123. El Gobierno de la provincia cuidará de comunicarle algunos ejemplares de la Constitución, para que la tengan presente como base de cuantas instrucciones puedan comunicárseles.

124. En las elecciones de representante o representantes y suplentes de la provincia, el Colegio Electoral tendrá presentes las ritualidades que se observan en la elección de los miembros de la Representación Provincial.

125. Para ser representante o suplente de la provincia se requieren los mismos requisitos que son necesarios para la elección de Gobernador.

126. Todos los naturales de las Provincias Unidas pueden ser electos representantes de Cundinamarca al Congreso, sin necesidad de residir en ella, pero sí en el territorio de la Confederación.

127. Esta residencia basta que sea por cinco años.

128. No se mirarán como extranjeros a los naturales de los demás Estados de la América libre.

129. No podrán ser representantes por esta provincia los extranjeros, aun cuando hayan obtenido carta de naturaleza, ni los españoles, a excepción de los que habiendo residido por diez años en la Nueva Granada al tiempo de la Independencia, la hayan jurado, reconocido y sostenido con hechos tan públicos e irrefragables que acrediten su adhesión a ella, como está prevenido en el artículo 8º del reglamento formado por Congreso para el ejercicio de las facultades y atribuciones del Gobierno General.

130. El representante o representantes y suplentes de esta república nombrados por el Congreso de la Nueva Granada, harán por lo que respecta a la provincia jura-

mento de cumplir con los deberes de su representación ante el Gobernador de ella.

131. Los suplentes llenarán las faltas de los principales, así temporales como perpetuas, hasta que reunido el Colegio Electoral en su período elija representante; entre tanto el suplente que queda lo será de ambos.

132. Cuando el Colegio nombre representante por falta de alguno, durará todo el tiempo que le faltaba a éste.

Elecciones primarias.

133. Carecen de voz activa y pasiva en las elecciones los que tienen causa criminal pendiente, los que hayan sufrido pena infamatoria, los fallidos voluntarios y ejecutados, o alzados con la hacienda pública, los sordo-mudos, dementes y mentecatos, los que estando al servicio de otro viven de ajenas expensas, los que están separados de sus mujeres sin justa causa legalmente justificada ante juez competente, los transeúntes y los vagos, quienes serán perseguidos por todos los jueces como enemigos de la sociedad.

134. Los ciudadanos que no concurren a sufragar para estas elecciones por algunos de los modos dichos en la Constitución serán multados en cuatro reales para gastos de escuelas en favor de jóvenes pobres, cuya multa la exigirá el Alcalde y entregará a los apoderados con la cuenta y lista para que examinen si confronta con los votos dados y pueden hacerle cargo por lo que no hubiere cobrado depositando su importe en persona de responsabilidad del lugar bajo de recibo para la aplicación indicada.

135. Cuando a algún pueblo en la elección de apoderados le ocurriere alguna duda, no suspenderá la elección; pero sí la manifestará al cuerpo de apoderados y presidente, a fin de que, manifestándola a sus electores, éstos

lo hagan presente al Colegio Electoral para que fije reglas sobre la materia, que sirvan en lo sucesivo.

136. Las personas que tuvieren la pluralidad respectiva en el primer escrutinio de los sufragantes, se tendrán por apoderados del pueblo.

Elecciones secundarias.

137. Observados los artículos 23 y 24 de la Constitución del año de 1812, reunidos los apoderados en las cabeceras de sus respectivos cantones, procederán a elegir su Juez político, alcaldes ordinarios, partidarios de la hermandad, regidores, padre general de menores, personero público, y demás funcionarios que antes elegían los cabildos, según el número que haya habido en cada cabecera. Este acto lo presidirá el Juez mayor, poniendo los ojos para estos encargos en personas recomendables por sus virtudes morales y cívicas, en inteligencia de que no podrá haber regimiento perpetuo por ser contrario a la naturaleza del sistema.

138. El censo de diez mil almas dará un elector, y si excediere de esta base dará dos, hasta veinte mil, y pasando de este número, tres hasta treinta mil, y así sucesivamente. Pero todo partido o cantón, aunque no alcance a las diez mil, dará un elector.

139. Para el primer escrutinio de estas elecciones se necesita la pluralidad absoluta, esto es, uno más sobre la mitad de los concurrentes, y para el segundo, basta la pluralidad respectiva.

140. Los apoderados de las parroquias de esta capital presentarán sus documentos ante el Teniente Gobernador, y éste con dos regidores nombrados por el Ayuntamiento, hará todo lo prevenido para las cabeceras de partido.

Del Colegio Electoral.

141. Al Senado corresponde la calificación de electores, aun instalado ya el Colegio.

142. Los electores serán revisores de la Constitución cuando a más de traer las dos terceras partes estas facultades en sus poderes, el Senado califique por bastantes las razones que para ello hayan tenido los pueblos.

143. Los electores durante la ocupación del Colegio no podrán ser destinados a otra por ninguna autoridad sin anuencia y consentimiento de esta corporación.

144. El Colegio Electoral, en el acto de proceder a las elecciones de funcionarios, deberá tener presente que para ser miembros de la Representación de la provincia se requiere la edad de veinticinco años cumplidos, dueños de su libertad que no la tengan empeñada por precio, como ni los que tengan menos de cinco años de vecindad, ni los que hayan dado muestras de ser opuestos a la libertad americana, y transformación de nuestro Gobierno, ni los que se hallen baldados o lisiados de modo que estén impedidos para el ejercicio de las funciones propias del ministerio, ni los que tengan las demás notas contenidas en el artículo 133 de este reglamento.

145. Los electores no podrán sufragar para miembros de la Representación de la provincia, ni para representantes al Congreso por parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y cuando se trate de alguna materia que toque a alguno comprendido en estos grados en el Colegio, deberá no sólo salir éste, sino los que sean sus consanguíneos y afines en dichos grados.

146. Podrá el Colegio revisar en su caso y ejercer todos los actos que le corresponden, aunque sólo concurre el número de once, y siete harán sanción en toda materia;

pero velarán sobre los que falten a negocio de tanta importancia e interés de la sociedad, privándolos de la concurrencia de su cuerpo, si faltan por tercera vez y no comprueban legítima causa que los indemnice a juicio de sus individuos, avisándolo a sus comitentes para que no los vuelvan a elegir en lo sucesivo.

147. El próximo Colegio Electoral se reunirá el 3 de noviembre de 1816, y los siguientes tendrán el espacio intermediario de un año.

148. Finalmente, en los casos que no se hallen prevenidos en este reglamento, se observará lo que en el particular disponga la Constitución del año de 1812 en lo que no le sea contrario, ni se oponga al nuevo sistema de centralización.

Santafé, 13 de julio de 1815.

Por el Colegio, PEDRO DE LA LASTRA, vicepresidente. *Juan Antonio García*, designado.—*Pedro María Ronderos*, secretario.—*José María Mutienx*, secretario.

Santafé, 13 de julio de 1815.

Al Poder Ejecutivo de la provincia para su publicación y cumplimiento.

LA LASTRA, vicepresidente.—*García*, secretario.—*Mutienx*, secretario.

Certificamos que es copia de lo sancionado en las respectivas actas de revisión, y de la redacción aprobada hoy 13 de julio de 1815.

Pedro Ronderos, secretario.—*José María Mutienx*, secretario.

Por Santafé, EMIGDIO BENÍTEZ, presidente del Colegio. Antonio Baraya, Santiago Umaña, Francisco Morales Galavís.—Por Bosa, Juan Agustín Chaves, Juan Nepomuceno Lago.—Por Bogotá (Funza), Francisco Javier García, Joaquín Cediell, Ignacio Calderón.—Por Zipaquirá, PEDRO DE LA LASTRA, vicepresidente.—Francisco Morales Fernández, Mariano Forero.—Por Chocontá, Juan Antonio García, designado.—Ignacio Lozada, Manuel Fernández Saavedra, Manuel Camacho y Quesada, Juan Ronderos Grajales.—Por Ubaté, Juan Granados, Pantaleón Gutiérrez, José María Serna.—Por Chiquinquirá, Agustín Barona, Fr. Agustín Casas, Fr. Vicente Blanco.—Por Tocaima, Francisco García Hevia, José Gregorio Caicedo, Rafael Araque, Antonio Patiño.—Por Guaduas, Joaquín Vargas Vargas, Luis Rubio, Andrés Pérez.—Por Ubaque, Miguel Tobar, Pedro Ricaurte.—Por La Mesa, Emigdio Troyano, Bruno Espinosa, Policarpo Jiménez.

Santafé, 19 de julio de 1815.

Cumplase y ejecútase. Publíquese por bando, e imprimiéndose, circúlese en el distrito de la provincia, haciéndose las comunicaciones convenientes.

García.—Ballén de Guzmán, secretario.